

Energía en riesgo

“Mientras se postergan proyectos y se retiran inversionistas, la estrechez energética se vuelve una realidad predecible e inevitable si no existe voluntad política para sortearla”.



Susana Jiménez,
economista senior
de LyD

La recomendación de Colbún de suspender en forma indefinida el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión de HidroAysén, así como su alusión a que “no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”, no pueden más que encender señales de alarma.

Se trata de un proyecto de energía limpia y renovable, que debía aportar al país a partir del año 2021 una generación anual estimada en 18.400GWh, equivalente a 30% de la producción actual del país. Si se considera adicionalmente que esta decisión pudiera comprometer el desarrollo de los proyectos de Energía Austral, que agregarían otros 7.000 GWh, la generación hidroeléctrica perdida ascendería a más del 40% de la energía producida actualmente en Chile. Es, por tanto, un proyecto estructural, necesario a partir de comienzos de la próxima década para satisfacer una demanda energética del país que pasará de los 60.000 GWh actuales a 150.000 GWh hacia el año 2030.

Aquellos que celebran esta decisión debieran preguntarse cómo habría de reemplazarse HidroAysén y si es factible hacerlo. Porque, aunque digan lo contrario, un proyecto de esta envergadura es insustituible por fuentes de energía renovable no convencional; no hay proyectos suficientes a costo razonable, su escala de desarrollo individual es baja y requeriría la construcción de varios miles de kilómetros de líneas de transmisión para conectarlos, algunas de estas tecnologías tienen generación intermitente y bajo factor de planta (eólicas y solares) y, finalmente, la intervención de superficies y ríos que ello implicaría lo hace inviable.

Por cierto, se podría reemplazar HidroAysén con centrales térmicas (7

u 8 plantas adicionales a las que igualmente habría que construir para entonces) lo que constituye una solución económicamente más viable, pero es claro que no contaría con la simpatía de la ciudadanía, dados sus efectos ambientales y territoriales. Y, claro, nadie quiere hablar todavía de la opción nuclear como alternativa.

Este contexto no parece nada auspicioso y es necesario que el Estado tome definiciones que hagan posible el desarrollo de los proyectos. El sistema eléctrico ha sido eficiente en el pasado para abastecer de energía al país, aun ante escenarios adversos. Sin embargo, hoy las iniciativas privadas de generación —sean fuentes hidro, termo o no convencional— y de transmisión enfrentan una fuerte oposición ciudadana, un retraso creciente en las aprobaciones ambientales y en la tramitación de las concesiones y servidumbre, y dificultades pro-

pias de la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura. Así, mientras se postergan proyectos y se retiran inversionistas, la estrechez energética se vuelve una realidad predecible e inevitable si no existe voluntad política para sortearla.

El gobierno tiene una responsabilidad ineludible ante este escenario. No se trata de que intervenga la operación del mercado eléctrico ni deba jugarse por un proyecto u otro. Pero en el caso de proyectos de esta magnitud e importancia, debe hacer ver lo que está en juego con su desarrollo y transparentar los costos de sustituirlos por otras alternativas. Adicionalmente, si está convencido de la conveniencia de tales proyectos, debe hacer viable su ejecución, no mediante subsidios, pero sí a través de herramientas que hagan posible su desarrollo. En esa línea, se hace urgente acelerar iniciativas como la carretera eléctrica y el proyecto de ley de concesiones eléctricas que está en el Congreso.

